

dad criminal, por el impedimento á que se contrae la fracción 16, artículo 34 de ese Código.

Por lo expuesto, mediante los fundamentos expresados, artículo 89 del Código penal y de conformidad con lo pedido por el Ministerio público, fallo:

Se absuelve á Ricardo Bouquet, Jesus Ramirez, Magdaleno Loyola y José Dolores Hernandez, del delito de infracción del artículo 957 del Código penal, de que se les hizo cargo.

Y quedando confirmada la sentencia que pronunció el ciudadano Juez de Distrito de Guanajuato á once de Marzo del presente año, notifíquese y ejecútese, librando la Secretaría los recados que corresponden y remítase la presente causa á la Superioridad para su revision.

El ciudadano Magistrado de Circuito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Rámis Portugal*.—*Ramon Reynoso*.

Es copia que certifico. Querétaro, Mayo 6 de 1875.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del ciudadano Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interino dice: que contra Ricardo Bouquet, Jesus Ramirez, Magdaleno Loyola y Dolores Hernandez, se siguió causa en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por violacion de leyes electorales. En 1ª instancia, fueron absueltos los reos, por no aparecer intencion dolosa de su parte al cometer las infracciones de que resultaron confesos y convictos; y en 2ª se les absolvió tambien, quedando confirmado, por lo mismo, el fallo del Juez de Distrito, por el que al efecto promovió, en 27 de Abril último, el Tribunal de Circuito de Querétaro, el que habiendo causado ejecutoria ha quedado, lo mismo que el otro, y los procedimientos que les precedieron, sujetos á la revision de esta Corte.

No encontrando méritos el que suscribe para exigir la responsabilidad, pide á la Sa-

la se sirva declararlo así, dando al mismo tiempo por revisado el proceso.

México, Mayo 15 de 1875.—*Lozano*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 17 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.

FF.—*José María Iglesias*.—*M. Auza*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Luis Velasquez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Mayo 26 de 1875.—*Gómez Eguarte*, oficial segundo.

AMPARO.

Promovido ante Juzgado de Distrito de Querétaro, por varias Señoras ex-religiosas, contra el cobro que se les hace de la contribucion de capitales que como dotes les han sido asignados.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Recaudador de contribuciones directas del Estado, cobra las correspondientes á los capitales impuestos para alimentos de las religiosas exclaustradas, sin atender á la disposicion del Gobierno General, que exime de todo pago de contribuciones las dotes de dichas señoras.

Desde luego se echa de ver, que no puede estar al arbitrio de un agente secunda-

rio del Estado, menospreciar las disposiciones del Gobierno General; y que para evitar casos como éste, ha concedido la Constitución á los Tribunales de la Federación, el conocimiento y resolución de toda controversia que se suscite por leyes ó actos de las autoridades de los Estados, que invadan la esfera de la autoridad federal. (art. 101).

El principio de la separación de los dos poderes, federal y de los Estados, es incontestable. El respeto de la cosa juzgada emanando del primero como supremo, por el segundo, no puede ser contestado en teoría, aunque la práctica ofrezca algunas dificultades, para cuya resolución se ha establecido el arbitrio inapelable de los Tribunales de la Unión, (arts. 40, 41, 87 y 100 de la Constitución). Estos resuelven diariamente numerosas controversias que tienen divididas las mejores inteligencias sobre la competencia en materia de interpretación de los actos que afectan á la soberanía, que para su régimen interior ejercen los Estados.

Imponer contribuciones, es indudablemente facultad de los Estados; y la federación podrá á su vez exceptuar á determinadas personas, de la ley local, sin quebrantar la soberanía de aquellos. Reservadas á los Estados las facultades no concedidas expresamente á los Poderes federales (en donde está la determinación legal, precisa que autorice á éstos eximir de las contribuciones impuestas por los primeros? (arts. 41 y 117 de la Constitución).

Vista la cuestión de un modo tan vago, confirma el sentido de la regla de derecho que considera peligrosa toda generalización. *Omnis definitio in juri periculosa est.* (L. 202 D. de reg. jur.). Y de este peligro no se ha escapado el C. Recaudador de Contribuciones, quien contra la unánime opinión de los Magistrados que forman el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sigue sosteniendo que es un crimen de lesa soberanía de Estado, el exceptuar á las Reli-

giosas exclaustradas, del pago de contribuciones.

En efecto, aún en los términos de la teoría legal, que pudiéramos llamar del derecho puro, padecen las reglas infinitas excepciones, de manera que, según la feliz expresión de un jurisconsulto: *apenas hay regla, que pueda tenerse en pié, parum est enim ut non subverti posset.* (L. 202 de reg. jur.). En la práctica, las dificultades aumentan por la múltiple variedad de los hechos jurídicos que á su pesar conducen al jurisperito al resbaladizo terreno de los casuistas.

En la presente cuestión, para resolver en el sentido del C. Recaudador, es necesario suponer que un acto irreflexivo y hasta inconstitucional del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, dió margen á la exención de las Religiosas, en época por cierto en que la opinión pública tendía á demoler lo antiguo, para modelarlo conforme á las exigencias de la moderna sociedad. Es necesario suponer que el Gobierno General tenía su apoyo en ese exajerado catolicismo que desconoce las máximas del evangelio, que no era combatido por el clero, y que las monjas eran sus mas ardiente, partidarias. En una palabra, hay que desconocer las circunstancias en que á estas se les hizo la concesión, para considerarla ó bien fruto del favoritismo, ó bien hija de aquella credulidad que hiciera escribir en el cuerpo del derecho canónico el título de: *Inmunitate Ecclesiarum et rerum ad eas pertinentium.* Ni una ni otra cosa han sucedido; ántes bien, se hizo la concesión en tiempo en que el gobierno quebrantó el poder clerical, fuertemente establecido enfrente de él; en tiempo en que la benéfica luz de la reforma iluminó por vez primera los horizontes de la República; en tiempo en que el derecho de propia defensa obligó á la sociedad á armarse contra los enemigos del progreso. Además, los actos del Gobierno de la Unión siempre han sido meditados y prudentes, y no es de creerse que concediera una inmunidad por el simple pru-

rito de tomarse ajenas facultades, cuando bastante que hacer le daba el ejercicio de las propias.

Si el C. Recaudador se hubiera remontado al origen de la inmunidad, pudiera haber conocido que el art. 128 de la Constitución dice: que corresponde exclusivamente á los poderes federales, ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervencion que designen las leyes. En virtud de esta atribucion constitucional, pudo el Gobierno ocupar los bienes de *manos muertas*, y señalar á los actuales titulares la indemnizacion correspondiente, por lo que perdian en la mutacion de estado que no podian conservar. Así evitó el escollo de la retroactividad, que sólo se limita á leyes que extinguen corporaciones; porque la existencia de éstas como personas jurídicas, capeces de derechos y obligaciones, depende de la voluntad de la sociedad, mientras que los derechos de los individuos son innatos. Cuando el supremo Gobierno extinguió las corporaciones religiosas, usó, como se ha visto, de una prerrogativa constitucional; y destruyéndolas, quizo poner á las personas al abrigo de la miseria y del abandono, á cuyo efecto señaló á cada una los precisos alimentos. Comprendió que podía acumular el capital señalado, con menoscabo de las necesidades apremiantes de la Hacienda Pública, y prefirió aumentar los réditos con perjuicio del capital, que quedaba á beneficio de ésta.

No ha sido sino en vista de las necesidades presentes, que el Supremo Gobierno dictó la circular que eximió á las exclaustradas del pago de contribuciones; sin que los Estados reclamaran, porque á su vez eran compensados con el veinte por ciento del producto de las ventas de los bienes nacionalizados, y porque consideraron justa la medida del Ejecutivo de la Union, que entonces disfrutaba de facultades extraordinarias.

La concesion no fué una mera donacion gratuita, sino un *datum ob causam*: una

compensacion por el usufructo de mayores capitales, que se quitaba á las religiosas; quienes aunque disfrutaban de iguales dotes con pago de contribuciones, perdieron en la exclaustración el derecho de habitacion gratuita, las economías de la vida en comun, y el auxilio de los réditos de las monjas difuntas, que como es sabido, aumentaba el patrimonio conventual.

La Constitucion ha querido que todos sus preceptos, cuando afectan el interés individual, sean reclamables por la vía de amparo. A este fin ha proveído á su propia supremacia en el art. 126, y determinado en el 16, que todo mandamiento venga de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y como en el caso sea incompetente el C. Recaudador para privar á las quejas de un derecho establecido por el Gobierno de la Union, resalta inmediatamente la violación de la garantía consignada en dicho art. 16.

Las exenciones, como todo lo aumenta nuestro patrimonio, son susceptibles de dominio; y como este cuando es de los particulares, no pueda ser ocupado, sino por causa de utilidad pública y previa indemnizacion, no puede hacerlo en el caso el C. Recaudador, sin violar el art. 27 de la Constitución.

La concesion produce un derecho adquirido, susceptible igualmente de propiedad; no puede por lo mismo anular aquella, sin violarse el art. 27 ya citado.

Chauveau Adolphe, en sus principios de competencia administrativa, asienta: "que el derecho adquirido nace de los actos administrativos puramente discrecionales; mas de este principio de derecho natural, *dar y retener no vale*, se sigue que si la administracion podia rehusar el favor solicitado, una vez concedido, el objeto de la concesion corporal, ó incorporal, viene á ser propiedad del reclamante. La concesion ha creado un nuevo derecho, dando origen á un derecho primitivo." (núm. 91). Y si esto sucede respecto á los actos adminis-

trativos ¿qué podrá decirse de los que directamente dimanen del Poder Legislativo, como es la concesion debatida?

El art. 14 de la Constitución, prohíbe todo efecto retroactivo, así en la expedición como en la aplicación de la ley. Se considera que produce este efecto, todo acto que destruye los derechos adquiridos. "La no-retroactividad de la ley, dice Marcadé, consiste en no podernos quitar los derechos que hemos adquirido." El mismo autor enseña: "que el efecto de una donación, es atribuir actual, inmediata é irrevocablemente, al donatario, la propiedad de la cosa donada;" y que "en las donaciones, es siempre la primera ley la que está en vigor al tiempo de la donación, la que únicamente debe aplicarse." (Marcadé, explicat du. Cód. civ. tit. preliminar. art. 2 § 3). Y aunque estos principios sean puramente de derecho civil, también se aplican á las concesiones hechas directamente por la ley, como lo explica Maillier de Chassat, en su tratado especial sobre la retroactividad de las leyes, cap. 3 sec. 3ª núm. 5.

La ley dice: puede en sus miras generales de orden y bien público, contener disposiciones á título gratuito; y las reglas relativas á los actos de liberalidad, en lo concerniente á los derechos adquiridos, le son perfectamente aplicables. Si tal sucede en las donaciones puras, ¿no procederá en los semejantes á las remuneratorias, por hacerse á título de compensación? En vista de estas consideraciones, el Promotor fiscal pide: se conceda el amparo solicitado.

Querétaro, Diciembre 11 de 1874—
Luis Castañeda.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Enero 19 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por las Sras. ex-religiosas Eufrosina de San Juan Bautista, María de la Luz Merlo, Andrea Martínez, María Josefa de

Santa Teresa, María Asunción F. de San Simón, Anna Lefebvre, María Pomposa Vega y Anna Coria, contra el acto del C. Recaudador de contribuciones, que les cobra las que impone la ley de presupuestos del Estado de 20 de Junio de 1874, sobre los capitales que, como dotes, les asignó el Supremo Gobierno; con cuyo acto juzgan violadas en sus personas, las garantías que les otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitución general, al estar exceptuadas del pago de todo gravamen é impuesto por la circular que el Supremo Gobierno, en virtud de facultades extraordinarias, expidió en 26 de Febrero de 1861, recordada por la de 25 de Agosto de 1861; cuyas circulares en opinión de las quejas, como complementarias de la ley de excomunión, obligan á toda la República y no pueden alterarse sin invadir la esfera de la autoridad federal. Vistos los informes rendidos á fojas 17 y 21 por el Recaudador de contribuciones, en los que manifiesta, que la oficina de su cargo no exige á las señoras religiosas el pago de contribución alguna, sino á los propietarios de las fincas rústicas ó urbanas del Estado; que si sobre algunas de ellas hay capitales impuestos como dotes de religiosas, no es á ellas, censualistas á quienes cobra, sino á censatarios: que la circular en que las quejas apoyan el recurso, está derogada tácitamente por el decreto de 13 de Marzo de 1863, que les impone las mismas obligaciones que á todos los ciudadanos, por lo cual, teniendo estos la de contribuir á los gastos públicos, ellas deben igualmente hacerlo.

Visto lo pedido por el C. Promotor fiscal, las pruebas rendidas, lo alegado por las quejas y todas las constancias de autos.

Resultando: Que de la certificación de fojas 34, aparece comprobado por las declaraciones unánimes de los CC. Julio M. Cervantes, Francisco Bustamante, Juan N. Rubio, Alfonso Septien y José M. Herrera y Lozada, los cuales siendo los tres primeros Gobernadores del Estado en diversas épo-

cas, y los segundos secretarios del despacho, gestionaron ante ellos las señoras ex-religiosas, y aun obtuvieron escension para el pago de contribuciones por dotes; así mismo de las declaraciones de los CC. Antonio Udaeta y Luis Fuentes, y de los informes del C. Recaudador, autoridad ejecutoria del acto reclamado, el que actualmente se les exige el pago de los impuestos señalados en la ley de presupuestos del Estado.

Considerando: Que la competencia de los Poderes federales, para legislar en todo aquello que tiene relacion con los bienes que administraba el clero, es clara, pues se deduce de preceptos constitucionales, (arts. 27 y 123,) en virtud de los cuales fueron expedidas las leyes llamadas de reforma, en las que se encuentran expresas las razones legales y de conveniencia pública que se tuvieron presentes al expedir: que el C. Presidente de la República al expedir la circular de 26 de Febrero de 1861, obró en el círculo de las facultades de que se hallaba investido, las que le fueron otorgadas con arreglo á las prescripciones constitucionales: que los Estados no tienen mas facultades en su régimen interior, que las que no se encuentran expresamente concedidas á los Poderes federales, (art. 117 de la Constitucion.)

Considerando: Que en virtud de los principios asentados, el Gobierno federal tuvo facultades, y por lo mismo fué competente para legislar en lo relativo á los bienes del clero; y siendo esto así, es así mismo fuera de duda que igual competencia tuvo para reglamentar, aclarar y resolver las dudas que en la ejecucion de dichas leyes ocurriesen; de aquí el que se expidiera la circular de 26 de Febrero de 1861, como aclaratoria de los arts. 17 y 21 de la ley de 12 de Julio de 1859, del 32 de la de 13 de Julio del propio año, y del tít. 11 de la de 5 de Febrero del propio año de 1861, cuya circular, como las leyes con que se relaciona, obligan no solo al Distrito Federal y Territorio, sino á toda la República, segun se in-

—TOMO VII—PARTE II.

fiere del texto constitucional, (art. 114,) y tambien de la prescripcion expresa de la ley de 23 de Marzo de 1861, de lo cual se deduce, que no existe la invasion de la autoridad federal en el régimen interior del Estado, que aduce el C. Recaudador.

Considerando: Que el Supremo Gobierno al conceder á las señoras ex-religiosas el que recibieran sus dotes y pudieran disponer de ellos á su fallecimiento con total arreglo á las leyes comunes, quizo tuvieran con que atender á su alimentacion, sin que los réditos que de dichos capitales percibiesen, les fueran menoscabados en lo mas mínimo, segun se infiere de las leyes ya citadas y expresamente de las circulares de 26 de Febrero de 1861, y de 25 de Agosto de 1862, sin que en dichas circulares que tienen el carácter de generales, como antes se ha dicho, se haga distincion de los gravámenes ó impuestos de las autoridades federales ó locales, por lo cual no podria subsistir distincion alguna, sin infraccion de la conocida regla de derecho "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, L. 32, ff. de Recep. qui arb."

Considerando: Que al eximir el Gobierno general á las monjas, en virtud de la facultad que para ello tiene, de todo impuesto y contribucion, el imponerles la ley de Hacienda del Estado un gravámen de seis al millar á sus capitales, es invadir la esfera de las autoridades federales, por ser esta facultad de ellas y no de las de los Estados.

Considerando: Que siéndole la escritura que otorga el Gobierno general á las monjas, el título de propiedad de los capitales que como dotes reciben para atender á su alimentacion, en dicho documento existen los derechos y obligaciones de ambos. Que en ellas siempre se pacta con arreglo á los principios legales citados, el que se les asigne el capital libre de toda clase de contribucion, sin distincion alguna. Que el imponerles algun gravámen cualquiera que sea, es violar en sus personas el art. 27 de

Constitucion. Que al exigirse el pago de dicho gravámen, se les molesta en sus personas y propiedades por autoridad que no es la competente, y sin causa legal que funde y motive el procedimiento, art. 16 de la Constitucion. Atendiendo por último, á que la razon alegada por el C. Recaudador de estar derogada tácitamente la circular de 26 de Febrero de 1861, por el decreto de 13 de Marzo de 1863, no es de atenderse, pues dicho decreto no la derogó ni expresa ni tácitamente en ninguno de sus artículos, pues para que esto hubiera tenido lugar, habria sido necesario que el decreto de 13 de Marzo contuviese disposiciones contrarias á la circular de 26 de Febrero, lo que no es así, pues ambas contienen prescripciones distintas y sin relacion entre ellas: que respecto á la objecion de que las gestiones de la oficina se dirijen á los censatarios y nunca á los censualistas, no es tampoco de atenderse, porque esto equivale á exigirlo á las referidas religiosas, á quienes en su caso los censatarios deducian de sus réditos lo que pagasen por tales cobios, lo que ciertamente infringiria terminantemente la circular de 26 de Febrero de 1861, que dice expresamente: "todas las personas que se obliguen á reconocer capitales á favor de señoras religiosas conforme á las prevenciones hechas por este Ministerio, no paguen impuesto ni contribucion alguna por dichos capitales, por debense destinar los réditos respectivos á los alimentos de las expresadas señoras." Por último que las obligaciones de que habla el art. 19 del decreto de 13 de Marzo de 1863, no son ciertamente las de contribuir á los gastos públicos, existiendo una ley que las exceptúa de ellos. Por las razones y fundamentos legales expuestos y con apoyo de los arts. 16, 27, frac. 1º del 97, y de los 101, 102 y 117 de la Constitucion general de la República, debia fallarse y se falla: 1º Que la Justicia de la Union ampara y protege á las señoras ex-religiosas Eufrosina de San Juan Bautista, Mª de la Luz Mer-

io, Andrea Martinez, Mª Josefa de Santa Teresa, Mª Asuncion F. de San Simon, Anna Joffrey, Pompoza Vega y Anna Coria, contra el acto del C. Recaudador de contribuciones que les cobra estas por sus dotes que les señaló el Supremo Gobierno para sus alimentos. 2º Repóngase el papel simple invertido por el del scilo respectivo. Notifíquese; compúlsense las copias respectivas para su publicacion y dévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así lo decretó el C. Juez de Distrito Lic. Victor de la Peña, y firmó. Doy fé.—*Victor de la Peña*.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia que certifico. Querétaro, Febrero 3 de 1875.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 18 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por las señoras ex-religiosas, cuyas nombres aparecen en el escrito de fojas 11 de las actuaciones de 1ª instancia, contra la aplicacion que, en perjuicio de las mismas señoras, se hace de la ley de presupuesto de ingresos del Estado, de 20 de Junio del año pasado, exigiéndoles el pago de contribuciones por los capitales que como dotes les han sido asignados, no obstante que con arreglo á la circular del Gobierno de la Union de 26 de Febrero de 1861, están eximidos esos capitales de toda clase de impuestos; por cuyo motivo creen las quejadas que con el cobro de los establecidos por la expresada ley de presupuestos, se vulneran las garantías que consignan los arts. 16 y 27 de la constitucion de la República. Y Considerando: que el Ejecutivo Federal usando de las amplias facultades de que estaba investido, expidió en 26 de Febrero de 1861 la circular aclaratoria por la cual es

tableció que los capitales cedidos como dotes á las religiosas exclaustradas, quedaban exentos del pago de contribuciones, mientras no pasaran á tercer poseedor.

Considerando: Que por lo mismo, las autoridades del Estado de Querétaro no han podido grabar los capitales asignados á las ex-religiosas, sin invadir la esfera de la autoridad federal y vulnerar, en perjuicio de las quejas, las garantías que consignan los artículos constitucionales 16 y 27.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 19 de Enero del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á las Sras. ex-religiosas Eufrosina de San Juan Bautista, María de la Luz Merlo, Andrea Martínez, María Josefa de Santa Teresa, María Asuncion J. de San Simon, Anna Lefevre, Pomposa Vega y Anna Conia, contra el acto del C. Recaudador de contribuciones, que les cobra estas por los dotes que les señaló el Supremo Gobierno para sus alimentos.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las clavó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico: México, 16 de Julio de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por varias señoras ex-religiosas, contra los actos del C. Recaudador de contribuciones.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que este expediente ha sido formado en virtud de la queja de las Señoras Religiosas exclaustradas que, representadas por D. Bonifacio Carmona y D. Mariano Rodríguez Velazquez, fueron anteriormente amparadas contra el cobro que se les hiciera de contribuciones, por el ciudadano Recaudador del ramo. Es bien sabido que los dotes de las expresadas señoras fueron eximidos del pago de impuestos por el Gobierno general, en uso de sus atribuciones legítimas.

El amparo anterior se concretó á los efectos de la ley de presupuestos, vigente en el Estado; resolviéndose que no debía de haberse hecho extensivo al pago que hoy se reclama. Entónces el que suscribe, creyó que todo lo que fué exigido con posterioridad á la interposicion del primer recurso, se tenía que devolver á las señoras religiosas. El Juzgado resolvió lo contrario, y con esa resolucioen se conformaron las quejas.

¿Cabe el amparo hoy interpuesto, supuestos estos antecedentes? ¿No se juzgó ya la presente cuestion, habiendo sido una misma la cosa, las mismas personas y tambien una misma la accion?

Estas consideraciones parecerán de mera fórmula, pero es lo cierto que, los juicios no pueden ser interminables, y por tanto la autoridad de la cosa juzgada obstará siempre á los que resuciten una cuestion concluida.

En vista de estas consideraciones, parece que no deberia concederse el amparo solicitado.